

“Mecanismos para enfrentar los cambios en las estructuras representacionales del sistema político mexicano”

Ponencia presentada en el XXIV Congreso Nacional de Estudios Electorales de la SOME 2013.

Leonel Álvarez Yáñez
leoalva2000@uaz.edu.mx

Presentación

La democracia parece ser el mecanismo idóneo para la convivencia social y política de los zacatecanos, pero no puede darse mientras el sistema político actual se caracterice por la carencia de legitimidad. La no satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos sigue siendo la bandera de los actores sociales y políticos para mantenerse en la cúspide de la organización política estatal pero, al no darse respuesta, debido a los intereses creados, los ciudadanos muestran un desencanto por la democracia y su sistema político. El único medio para mostrar su inconformidad, la elección de sus representantes públicos, es cada vez menos utilizado ante su ineficacia.

La solución, desde la perspectiva de los ciudadanos, es una mejor y mayor participación de los actores involucrados en la toma de decisiones. Tanto para las instituciones como para la ciudadanía, existen nuevas condiciones de sujeción que en apariencia se modifican y pueden revertirse mediante la liberación de la información. Es el cambio informativo para el cambio de actitudes y la generación de acciones sólo puede sustentarse a partir de una estrategia que ante todo busque la apropiación de la información y los sistemas para interpretarla, mediante la propuesta de sentidos de ubicación. Esto es, aquello que contribuya a trazar los mapas de las trayectorias seguidas y las rutas posibles como ubicaciones subjetivables resultará lo que habrá de considerarse como estratégico para la reconstitución social.

Existen diversos esfuerzos de la sociedad civil, para revertir la situación mencionada. Hemos visto aparecer más organizaciones no gubernamentales que renovación de prácticas; más observatorios ciudadanos de medios o de prácticas políticas que democratización en las industrias culturales e informativas, los institutos políticos o las instancias de gobierno; más organismos de transparentación que rendición efectiva de cuentas o ciudadanías informadas; más indicadores de confianza ciudadana que políticas y prácticas públicas confiables.

Contexto de la representación democrática

En los últimos años, el Banco mundial creó una agenda para saber por qué aun y cuando se realizaron las “reformas estructurales” los países en desarrollo no podían mejorar su desempeño gubernamental.

Así, bajo las concepciones dominantes se procedió a aplicar las reformas en materia económica y luego en materia regulatoria en general, se realizaron una serie de ejercicios que trataban de mejorar el ejercicio pleno de la democracia para todos los actores.

El resultado fue, un escaso prestigio de las instituciones gubernamentales como agentes para lograr el cambio buscado. El fracaso que perciben los ciudadanos es evidente en la región latinoamericana (ENCUP, Latinobaraómetro, LaPOP).

La democracia como tipo de gobierno y como idea de convivencia contiene elementos subjetivos y objetivos. Dichos elementos dan claridad los roles que existen en las relaciones de poder, es decir; la relación entre gobernantes y gobernados está en constante evaluación, por lo mismo los procesos electorales son tan frecuentes y necesarios. Sin embargo, este hecho no ha significado una mayor vinculación entre electores y elegidos.

La vinculación estrecha entre electores y líderes políticos como una de las características del desarrollo político, aparece hoy como una de las grandes deudas de nuestra democracia. Esta vinculación, se dificulta cuando el sistema

político en general no provee de una alta legitimidad de las autoridades electas. Y en este sentido se construiría un déficit democrático.

Esto es un problema viejo, David Easton (1969) plateaba el problema del apoyo específico y el difuso, los cuales el ciudadano ofrece, pero que no logran diferenciarse ya que se pueden confundir el apoyo básico a la democracia y la evaluación del gobierno en turno. Lo que muchas veces sucede es que se asocia lo segundo con lo primero. Y por ello tenemos datos con un enorme desencanto con la democracia asociados a un enorme decepción del gobierno en turno. Ante ello pocas veces el elector acepta que se equivocó y que con un cambio en la siguiente elección puede modificar el rumbo del gobierno, y no asociar su equivoco con un error de la democracia.

Entonces, se tiene que tener mucha pulcritud en los estudios de opinión y en términos empíricos, al realizar las interpretaciones de los datos, habría que diferenciar la satisfacción con la democracia (capacidad del sistema político para resolver los problemas apremiantes de la sociedad), de la satisfacción política que nace de la evaluación del rendimiento de los políticos profesionales.

Los enfrentamientos entre los poderes y los actores centrales de esos poderes que en México actualmente vive y observa el ciudadano son de los aspectos que requieren nuevas formas de interpretación ya que las normas y los parámetros con los que analizábamos aquellos enfrentamientos han quedado rebasados; y por tanto ocupan más espacio en la discusión para la modernización política. O sea, nos hemos estancado aplicando sólo la fórmula de cambios graduales en el sistema político para resolver los conflictos y las controversias que surgían. Ya lo sugería en otras palabras Arnáldo Córdova (2013) en un artículo de opinión de la jornada plantea:

“...Se nos promete lo que no se puede garantizar y con ello se corre deliberadamente el riesgo de demeritar y volver poco creíbles las propias reformas. Cada nueva reforma se presenta de modo tan inepto y tan poco convincente que a nadie convence. Todo mundo espera algo distinto y, a final de cuentas, apenas se conocen los primeros lineamientos, ya nadie está de acuerdo en nada y se da cuenta de que lo que le interesa no está comprendido en el cuerpo de la reforma.”

Entonces nosotros preguntamos, ¿las reformas ayudan al apoyo difuso de la democracia o a la satisfacción política? ¿qué rendimientos ofrece realizar reformas en vez de otros mecanismos, plebicitos, referéndum, comités, etc? ¿los cambios en la legalidad instauran una representatividad más acotada y directa? Las reformas estructurales atienden el déficit democrático?

Antes de responder esas preguntas planteamos nuestra premisa:

La democracia se nutre cada vez que los ciudadanos toman parte de los cambios políticos, económicos y sociales y culturales. El gobierno local/nacional pierde sentido democrático cuando se bloquean los canales institucionales de comunicación y representación. El autoritarismo y el centralismo en la toma de decisiones, es el desafío más importante que tienen que enfrentar los gobiernos locales/nacionales para consolidar la democracia. Si no se modifican estos factores, difícilmente podremos hablar de democracia satisfactoria que involucre a los ciudadanos concretos en las decisiones trascendentales.

Anunciadas las características básicas de mi planteamiento, los elementos que tomaré en cuenta para elaborar mi argumento y mi respuesta son los siguientes:

- a) de reformas y reformismo;
- b) cultura y participación política;
- c) confianza en las instituciones;
- d) el subdesarrollo persiste con y sin reformas

a) de reformas y reformismo

Desde los años setentas el crecimiento demográfico ha sido sostenido en México, así como en Latinoamérica. Se pensó entonces que las ciudades se harían incontrolables, la pregunta que desvelada a más de uno era cómo hacer un buen gobierno con cantidades enormes de población con sus demandas y problemas.

Es indudable que los problemas de las ciudades latinoamericanas no derivan exclusivamente del tamaño de su población o el ritmo de su crecimiento. En un contexto de cambio acelerado y obsolescencia de las estructuras del Estado tradicional, la “gobernanza” traduce una transformación real de las estructuras

sociales y un desplazamiento del centro de gravedad de la acción pública (Graña, 2005, 505).

La reforma del Estado constituyó una señal de búsqueda para encontrar una salida a la crisis económica, social y política por parte de los gobiernos priístas, lo que dejó como saldo la práctica de las tesis neoliberales; ha sido también el resultado de una búsqueda de adaptación a la era de la nueva globalización del siglo XXI.

El concepto de reforma del Estado es usado para describir y explicar un conjunto de transformaciones que presenta distintas características en cada país y, por lo mismo, responde a diversas causas, de acuerdo con la situación que en particular guarde cada sistema político-económico. Su campo de acción no se ocupa únicamente del aspecto económico, sino que también aborda aspectos políticos y sociales; sin embargo, es precisamente la dimensión económica la que ha tenido una posición de ariete para iniciar el cambio en la administración estatal y de ahí proyectar un efecto multiplicador en las otras dimensiones.

El discurso oficial indica que a través de la reforma se pretenden lograr diversos objetivos, entre los que destacan por sus implicaciones los siguientes: alcanzar la modernización, elevar la eficiencia y competitividad globales, ampliar la democracia y, desde luego, garantizar la justicia social (Aspe, 1993). Es claro que cada uno de estos objetivos recibe un tratamiento y una carga axiológica de acuerdo con los principios y necesidades de cada país.

En su faceta económica, sin duda es la más difundida, la reforma significa que el Estado deje de intervenir en la economía como lo hizo en el modelo benefactor. Por otro lado, el libre mercado auspicia la contracción estatal y favorece el intercambio entre naciones y, por lo tanto, impulsa decididamente la globalización económica. El sistema político, a través de la gestión económica del gobierno tiende a buscar “[...] su legitimidad a partir del consenso que se verifica periódicamente por medio de elecciones libres por sufragio universal (Bobbio, 2000, 24).

La reforma promueve supuestamente mayor accionar de la sociedad civil, misma que podemos definir como el lugar donde surgen y se desarrollan los

conflictos económicos, sociales, ideológicos y religiosos que las instituciones estatales tienen la misión de atender, mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos. Los sujetos de estos conflictos, y por tanto de la sociedad civil, precisamente en cuanto contrapropuesta del Estado, son las clases sociales o más ampliamente los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que las representan o que declaran ser sus representantes.

Según ofrecieron el su discurso, la élite tecnócrata mexicana, la reforma del estado con todas estas características resultaría en un fortalecimiento de la sociedad civil. Más activa e informada, menos condicionada por el Estado y con mayores márgenes de maniobra.

No obstante, el redimensionamiento del Estado conlleva ineludiblemente, en opinión de Aguilar, a la producción de nuevas instituciones, a pesar de los conflictos y la anarquía inicial que provoca la desaparición de los viejos patrones de relación civil y política entre sociedad, gobierno y Estado (Aguilar, 1989, 199).

Como consecuencia de lo mencionado, la línea que separa lo público y lo privado se ha redefinido: en la medida en que el Estado se contrae en alguna de sus competencias, ciertos grupos organizados, ocupan esos espacios.

Un resultado esperado sería, entonces, que debería haber más sociedad civil y menos Estado. Sin embargo, aún existen polémicas sobre las esferas de competencia del Estado y de la sociedad, sobre todo al interior de la parte instrumental del gobierno, o sea, la administración pública.

Las nuevas fronteras que se están dibujando entre la sociedad y el Estado deben preservar, para este último, un territorio y un papel irrenunciables: un ámbito de intervención y un papel conciliador entre las demandas de estabilidad, crecimiento y equidad en las que se funda, desde sus orígenes, el orden capitalista.

Las reformas al sector público que empoderan a los clientes y a los empleados de niveles inferiores parecen democratizar el sector público y abrir el gobierno a una gama más amplia de influencias que en el pasado. En cierto sentido, al destacar el papel de los grupos en la sociedad, este modelo naciente de forma de gobernar legitima la participación directa de la sociedad en la

elaboración e implementación de las decisiones de política. Sin embargo, el tipo de involucramiento que se genera tiende a ser definido de forma muy limitada por los participantes del área de política en cuestión, más que por los ciudadanos en general. Así, la gobernanza paradójicamente puede dar por resultado un conjunto de programas que sean aceptables y legítimos para sus participantes, pero no un gobierno que en su conjunto sea más legítimo que en el modelo representativo. (Peters, 2005, 596).

La tarea directiva de gobernar a la sociedad, de definir futuros de valía común y de realizarlos, ha ido tomando la forma de una actividad conjunta, asociada o en red, en la que participan actores públicos y privados, gubernamentales y sociales, nacionales e internacionales, poseedores de diversos recursos (financieros, cognoscitivos, tecnológicos, organizativos, morales) y de diversos niveles de poder (político, económico, de autoridad intelectual y moral), pero que acreditan contar con la capacidad y voluntad de crear un mundo de significación pública, de bienvivir y bienestar general, compatible con sus beneficios privados o sectoriales. (Aguilar, 2010, 202).

b) Cultura y participación política

En el período neoliberal mexicano, la presencia de nuevos actores políticos en la dinámica institucional se logró bajo la insistencia de apertura política que desde los años 60 y 70 se exigía por diversos movimientos sociales, lo que implicó que el Estado y la democracia cumplieran sus tareas en un escenario distinto –de mayores libertades, competencia, pluralismo y transparencia- donde la opinión y participación de sus ciudadanos es esencial.

El tipo de cultura y, por tanto, grado de participación política también necesariamente tenderían a cambiar. Nuevos aspectos que refieren a cómo los ciudadanos ejercen sus derechos y obligaciones, su interés por los procesos políticos y, en suma, si es o no, complicado para su vida cotidiana involucrarse en actividades políticas son algunos de los mecanismos para obtener información y medir las fluctuaciones de la ciudadanía.

Con los conceptos “cultura” y “participación” políticas queremos proponer más que una definición, una serie de rasgos de los ciudadanos que nos orientan para comprender las similitudes y contradicciones con otros espacios y ambientes del país. Ya que la cultura ciudadana se configura en gran medida como resultado de la intersubjetividad que acompaña a las relaciones sociopolíticas entre ciudadanía, gobierno y partidos políticos (Tejera, 2007).

La forma en que la sociedad y del gobierno emanado de ella, distribuyen las responsabilidades permite que se mantenga un alto grado de separación entre ambos. No hay mecanismos ni herramientas que ayuden a los ciudadanos a darle seguimiento a las tareas gubernamentales y a su vez la administración estatal mantiene una forma unívoca de comunicación e información que en los hechos desorienta y desanima a la acción colectiva ciudadana.

La cultura y la participación políticas, influyen en el comportamiento colectivo porque el ciudadano aprende cómo funciona el sistema político, y en términos generales como funciona la democracia mexicana. Lo que significa que el ciudadano y los políticos negocien las formas de reconocimiento y autorreconocimiento de las tareas de cada uno de ellos en la distribución del ingreso social (Tejera, 2007).

Estos elementos subjetivos de las relaciones de poder pueden (y en realidad lo hacen) consolidar pautas de acción que se arraiguen en la población por largo tiempo. Al respecto habría de tener las suficientes capacidades para diferenciar entre las percepciones subjetivas que surgen de las propias diferencias de las instituciones del Estado y las percepciones subjetivas que surgen del estado de la cultura política. Al respecto, entonces, no es suficiente tratar de describir los componentes subjetivos de la cultura política (Sentir, Imaginar, desear) sino también explicar lo que la gente hace, cómo lo hace, los factores que inciden en un determinado curso de acción (García, 2006).

c) Confianza en las instituciones

La confianza en las instituciones es vital para que el Estado democrático tenga amplios márgenes de maniobra, porque no basta con que las instituciones se

comporten democráticamente sino que sus ciudadanos así lo crean (Inglehart, 1991)

La confianza debe conseguirse constantemente y puede mantenerse, efectivamente, cuando la acción del gobierno responda a las demandas de la sociedad con resultados positivos en todos sus niveles.

El modelo construido en México para la relación ciudadano-representante no ofrece ninguna herramienta de retroalimentación entre ambos, lo cual deviene en una pauta de acción independizante una vez conseguidos los votos que le den acceso a una curul o encargo ejecutivo en el nivel local o federal.

La confianza en una institución conlleva la creencia de que ésta no actuará de una forma arbitraria o discriminatoria que resulte dañina para nuestros intereses como ciudadanos (Montero et. al, 2008). No obstante, la confianza se tenga no tanto por que hagamos inferencias respecto de los datos provenientes del entorno si no por atributos que radican en nosotros mismos. Tenemos fe en que los otros honrarán su palabra darán cumplimiento a las promesas, confiar en este sentido significaría arriesgar mis intereses en manos de otros.

En la situación actual, el sistema no ofrece oportunidades de confiabilidad. Ya que la confianza política supone una evaluación positiva de los atributos más relevantes que hacen de cada institución digna de confianza, como credibilidad, justicia, competencia, transparencia y apertura a puntos de vista diversos (Montero, et. al, 2008: 20).

Por tanto, la intención al medir la confianza que los ciudadanos depositan en sus actores políticos, económicos y sociales (gobernador, diputados, presidente municipal, burocracia, policía, maestros, institutos electorales, etc.) buscamos suministrar datos que suponen una evaluación que de cada institución realiza el ciudadano y mostrar su eficacia, competitividad, transparencia y otros aspectos que se interpretan por el investigador para así dar con los resultados de la percepción de que las instituciones en lo general funcionan o no y los efectos que ello tiene en la evaluación general que se hace de la democracia.

d) Gobernar en el subdesarrollo con y sin reformas

Como se sabe el subdesarrollo es antes que otra cosa una situación en la que el Estado es incapaz de tejer redes sociales más o menos sólidas en todas las zonas del territorio, en los sectores productivos, generando instituciones de bajo impacto. En otras palabras, el subdesarrollo genera un Estado fragmentado. La democracia que resulta de esta condición de atraso es una democracia estrechada por las carencias provocadas por el subdesarrollo.

Es cierto que las movilizaciones sociales en el contexto histórico entre los años 60 y 90's, se realizaron con el objetivo de abrir los espacios de representación que habían sido clausurados por diversos autoritarismos y dictaduras. Por tanto las investigaciones sobre la transición y consolidación democrática centraron sus observaciones en dichas demandas. No obstante sus aportes, perdieron de vista que en esas movilizaciones, se iban conjugando al mismo tiempo proyectos e impulsos a diferentes exigencias en tornos al sistema político-económico en general. Por un lado tenemos la emergencia de actores y agentes sociales que reivindicaban demandas de carácter racial y étnico, por otro, colectividades con agendas de tipo ecológico, de género de diversidad sexual etc., lo cual en si mismo inauguraba procesos democráticos no lineales, complejos e interminables

Con el proceso de transición a la democracia los gobiernos locales tienen ante sí los retos de lograr eficacia en sus políticas públicas, que los lleve a tener, de parte la sociedad civil, confianza en ellos. Para lograrlo los sistemas políticos tendrán que innovar y adaptarse a las nuevas circunstancias. Tales como: a) Eliminación de relaciones verticales, b) El Estado es un Nodo, c) interacción en redes, d) De la obediencia al reconocimiento de derechos, e) Empoderamiento, f) de la coerción a la delegación y a la colaboración. En suma que el acto de gobernar se convirtiera en “conducir” (steering), no mandar, sino concertar y comandar. En la “nueva sociedad”, la cual tiene como ejes centrales el consumo, la información y la comunicación.

Todo lo anterior nos coloca en una perspectiva más allá de la transitología y nos convoca a elaborar articulaciones complejas entre democracia, economía,

Estado y sociedad, que de cuenta de la realidad multidimensional del conflicto que viven actualmente países como México. Con una democracia representativa funcional y una degradación socio cultural, enmarcada en la elevada violencia, eliminación de ideales de futuro, miedo e incertidumbre.

En este proceso la democracia que se instauró (la representativa), no constituyó un nuevo significado del espacio publico que le brindara independencia a la sociedad civil frente al Estado. Desde este punto de vista a la democracia le asignaron un rol meramente selectivo de autoridades. Desincorporando los esfuerzos por articular otras formas de intermediación que subsistían en los grupos sociales organizados.

Tanto para las instituciones como para la ciudadanía, existen nuevas condiciones de sujeción que en apariencia se modifican y pueden revertirse mediante la liberación de la información. Es el cambio informativo para el cambio de actitudes y la generación de acciones sólo puede sustentarse a partir de una estrategia que ante todo busque la apropiación de la información y los sistemas para interpretarla, mediante la propuesta de sentidos de ubicación. Esto es, aquello que contribuya a trazar los mapas de las trayectorias seguidas y las rutas posibles como ubicaciones subjetivables resultará lo que habrá de considerarse como estratégico para la reconstitución social.

Existen diversos esfuerzos de la sociedad civil, hemos visto aparecer más organizaciones no gubernamentales que renovación de prácticas; más observatorios ciudadanos de medios o de prácticas políticas que democratización en las industrias culturales e informativas, los institutos políticos o las instancias de gobierno; más organismos de transparencia que rendición efectiva de cuentas o ciudadanías informadas; más indicadores de confianza ciudadana que políticas y prácticas públicas confiables.

El tránsito hacia sociedades con mecanismo representacionales novedosos queda pospuesto cada vez que falta una estrategia o que a la estrategia le falta el sentido práctico de la apropiación ciudadana. Para ellos un aspecto clave para el desarrollo de nuevas capacidades de interacción entre gobernantes y gobernados son las tecnologías de la comunicación y la información.

En muchos sentidos las TCI no sólo producen sociedades de la información, sino que se trata *en los hechos* de mecanismos y formas de ciudadanización.

Sin embargo, puede afirmarse que a la gran mayoría de estos esquemas comunicacionales les falta eficacia y que, incluso, la emergencia de muchos y muy diferentes, se antoja como uno de esos recursos que seran regulados por la mano invisible del mercado, pero que en realidad se constituye en algunos casos como disfuncional a todos los actores. Es cierto que algunos pocos de ellos han tenido incidencia en los espacios donde se legisla la materia.

Por eso planeamos que en el caso mexicano, sólo ha dispuesto de la imagen y de los símbolos como los mecanismos para enfrentar los cambios en las estructuras representacionales que el sistema político ha tenido. Descuidando que la información y transparencia facilitan la acción de gobierno, donde se encontrará en su mayor parte un estado de equilibrio entre las demandas del ciudadano y la respuesta eficaz de las instituciones de gobierno.

Asimismo, el ciudadano se encuentra disminuido en su capacidad para evaluar la información producida por los organismos públicos locales y nacionales en función de su adecuación a las estructuras de representación de los grupos poblacionales seleccionados. Es decir, un modelo de gobierno-ciudadanía basado en *sistemas de comunicación de ida y vuelta*, que responda a las necesidades en materia de prácticas democráticas y desarrollo autosustentable de las mismas. Que atienda los usos de las principales tecnologías locales de comunicación e información para la ejecución de prácticas democráticas y reproducción material.

Ahora bien, el principal desafío para estos modelos provienen no tanto del reconocimiento de que los factores sociales influyen sobre la percepción individual de las oportunidades, sino que aún promoviendo mayor participación se puede perpetuar o incluso aumentar la desigualdad social. Por este motivo, es necesario crear instancias democráticas de regulación social y que garanticen procedimientos equitativos y justicia en términos de equidad.

Para garantizar un proceso democrático y estimular el diálogo, es necesario no sólo que todos los sectores interesados en participar estén en igualdad de condiciones político-jurídicas, sino también que dispongan de los mismos recursos.

Para eso resulta indispensable la promoción material e intelectual de las comunidades y los sectores subalternos, los grupos sociales más desfavorecidos, con menor capacidad para defender sus intereses. Solo así se podrá ayudar a neutralizar los efectos de las asimetrías de capacidades y de habilidades existentes. De esa manera, la participación democrática se vincula a la redistribución de recursos como forma de garantizar la participación equitativa de todos; según la definición de Nancy Fraser y Axel Honneth (2006), la paridad participativa en el proceso de decisión. En esta concepción, la democracia se define como un sistema político que garantiza no solamente la igualdad político-jurídica, sino también la inclusión social de los ciudadanos. Esto garantiza, además de la validez formal de los derechos básicos de libertad, el derecho a su concreción efectiva.

En realidad, reclamar los derechos ciudadanos y luchar por una mayor participación requiere contar con ciertos recursos. Pero los individuos menos favorecidos cuentan con menos de ellos. En ese sentido, se les plantea una exigencia desmesurada. Por este motivo, la ciudadanía participativa solo está al alcance de aquellos ciudadanos que están en condiciones de reclamar sus derechos legalmente si fuera necesario. Por lo tanto, el debate sobre la ciudadanía carece de una concepción de la desigualdad social, a pesar de hacer de su disminución su principal bandera.

La premisa aquí es que el desarrollo de capacidades en un contexto de libertades es posible, pero alcanzar la igualdad trasciende el ejercicio de los derechos (libertad) sobre las oportunidades creadas para maximizar las capacidades. La democracia representativa que establece la igualdad jurídica de los ciudadanos, carece de mecanismos de regulación de la vida política que promuevan la solución a la tensión entre derechos individuales y colectivos en el ánimo de compensar las características socioeconómicas del país en cuestión.

La agenda pública que es ampliamente conocida y debatida es la que establece los límites y los roles de participación de en espacios legalmente constituidos, (representantes y autoridades del Estado), dejando de lado el análisis

colectivizado de valores y fines del gobierno frente a medio y capacidades de los individuos.

En lo anterior vemos el acento colocado en la “combinación armónica” de actividades, funciones y estructuras que refuerzan el *statu quo* y fortalecen las normas y las coacciones ya conocidas. Nuevamente la política se reduce a la capacidad reguladora de las instituciones entre supuestos individuos libres e iguales. La política ya no aparece como una actividad práctica en el conjunto de la vida social.

En suma, el proceso democratizador de los últimos años, ha logrado ampliar las libertades políticas con exigencias de participación ciudadana restringida al procesos electoral. Acto seguido se delega en el representante las obligaciones de decidir por la nación. Esta institucionalización del acto decisorio depende en gran medida de las condiciones que se establezcan para cumplir con esta obligación. Es decir, que las condiciones estructurales determinan el accionar de los individuos. Pero esta determinación, constriñe la capacidad para la apropiación de nuevas formas de organización y construcción de estructuras democráticas. Por ello decíamos arriba, no basta con ampliar el rango de intervención de los individuos en la democracia representativa, sino transformar las estructuras donde se construyen los acuerdos y las agendas políticas y socioeconómicas, sobre la estrategia de construir familias de métodos, no sólo un método (elecciones).

Las nuevas columnas institucionales que soportarán la democracia igualitaria, son aquellas que conjuguen el interés de conservación del *statu quo* y las exigencias de mayor participación de la sociedad. De aquellas emerge la legitimidad de la decisión y discusión de los miembros de la sociedad y se enuncia con mayor potencia y vigor la negociación sobre la base de razones aceptables para otros.

Referencias

- Aguilar, Luis F. (2010). "El futuro de la gestión pública y la gobernanza después de la crisis" En: *Frontera Norte*, Vol. 22, Núm. 43, enero-junio, pp. 187-213. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México
- Aspe Armella, Pedro, (1993). *El camino mexicano de la transformación económica*. México. FCE.
- Bobbio, Norberto, (2000). *El futuro de la democracia*, México, FCE.
- Córdova, Arnáldo (2013). "Gobernar por las reformas", La jornada, 22/09/2013.
- Easton, David (1969). *Esquema para el análisis político*. Amorrortu, Argentina.
- Fraser, Nancy y Axel Honneth (2006). *¿Redistribución o reconocimiento? Un debate político-filosófico*, Morata, Madrid.
- García Jurado, Roberto (2006). "Crítica de la teoría de la cultura política". En: *Política y cultura*. Núm. 026 Otoño, pp. 133-155. México.
- Graña, François. (2005) "todos contra el estado: usos y abusos de la gobernanza". *Espacio Abierto*, octubre-diciembre, año 7 vol. 14 núm 004. Maracaibo, Venezuela pp 501-529.
- Inglehart, Ronald. (1991). *El cambio cultural en las sociedades avanzadas*. CIS, Madrid.
- Montero, José Ramón, Sonja Zmerli y Ken Newton (2008). "Confianza Social, confianza Política y satisfacción con la democracia". En: *Revista Española de Investigaciones Sociológicas* (REIS) Núm. 122, pp.11-54. España.
- Peters, B. Guy (2005). "Gobernanza y burocracia pública: ¿nuevas formas de democracia o nuevas formas de control?" En *Foro internacional*, Vol. XLV, Núm 4 octubre- diciembre, pp.585-598. El Colegio de México. México.
- Tejera Gaona, Héctor (2007). "Las contradicciones culturales de la ciudadanía". En *Metapolítica* Núm. 53. Mayo-junio. pp 67-73. México.